

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C.
- SECCIÓN TERCERA -

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Juez	:	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	:	500012326000-2019-00060-01
Demandante	:	ASIESCO S.A.S. ¹
Demandado	:	MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL ²

EJECUTIVO - DESPACHO COMISORIO
RESUELVE RECURSO

I. ANTECEDENTES

- Mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2019 el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso ejecutivo de la referencia, decretó el embargo de bienes muebles y enseres de propiedad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que se encontraran en la Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 en la ciudad de Bogotá, limitando la medida a la suma de \$344.616.121; y, en tal virtud libró despacho comisorio ante los juzgados administrativos del circuito judicial de Bogotá (reparto) con el fin de llevar a cabo la diligencia correspondiente (fls.4-7). Dicha comisión le correspondió, por reparto, a este Despacho judicial (fl.27).
 - A través de auto de fecha 8 de octubre de 2020, el entonces titular de esta sede judicial auxilió la comisión y fijó fecha para la práctica de la misma, para el día 16 de febrero de 2021 (fl.31).
 - Mediante auto de fecha 12 de febrero de 2021, el Despacho resolvió devolver la comisión al considerar que no era competente para auxiliarla, dado que fue emitida con base en el artículo 171 del CGP, norma que establece excepcionalmente la comisión para la práctica de pruebas, más no para el embargo y secuestro de bienes muebles y enseres.
- La anterior decisión se notificó en el estado del 15 de febrero de 2021.
- El día 18 de febrero de 2021 el apoderado especial de Naranjo Abogados S.A.S., sociedad cesionaria de los derechos de Asiesco S.A.S., mediante escrito remitido desde la cuenta de

¹ Correos de notificación: cnaranjo@naranjoabogados.com, dpardo@naranjoabogados.com, jurídico.junior@naranjoabogados.com y dependencia.judicial@naranjoabogados.com.
² Correo de notificación: notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co y ceoju@buzonejercito.mil.co.

correo electrónico dependencia.judicial@naranjoabogados.com, interpuso el recurso de reposición en contra del auto de 12 de febrero y notificado el 15 del mismo mes.

Dentro de los argumentos del recurso se encuentra lo siguiente:

Citó los artículos 37 y 38 del CGP para afirmar que, “de la interpretación sistemática y semántica de estas disposiciones jurídicas, se puede inferir claramente que la competencia general para practicar los despachos comisorios para la imposición de medidas cautelares, corresponde en primer lugar a las autoridades judiciales. En el caso concreto es que el Tribunal superior del Meta (sic), quien de forma jurídicamente sustentada encomienda a los juzgados administrativos de Bogotá a la práctica del presente despacho comisorio.

Aunado a lo anterior, y contrario a la decisión tomada por el despacho el 15 de febrero de 2021; los alcaldes locales no son los únicos ni los primeros abogados para la comisión de embargos y secuestros, conclusión a la que se llega de la interpretación literal del artículo 38 del CGP, por cuanto el mismo establece en su inicio primero la competencia general de los tribunales para comisionar a autoridades judiciales de inferior jerarquía para la práctica de estas diligencias, y después establece que PODRA comisionarse a los alcaldes locales y demás funcionarios de policía, por lo que su competencia es subsidiaria.”

Finalmente, solicitó revocar la decisión proferida por el Despacho el día 12 de febrero y notificada el 15 del mismo mes; y, en consecuencia, fijar nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de embargo y secuestro de los bienes muebles en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa, conforme al despacho comisorio proferido por el Tribunal Administrativo del Meta.

-. El recurso de reposición se fijó en lista el día 23 de febrero de 2021 y, se corrió traslado los días 24, 25 y 26 de febrero de 2021 (fl.46).

II. FUNDAMENTOS

-. El numeral cuarto del auto de fecha 20 de noviembre de 2019, a través del cual, el Tribunal Administrativo del Meta resolvió sobre la solicitud de medida cautelar, estableció:

“CUARTO. COMISIONESE a los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (REPARTO), de conformidad con el artículo 171 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, para que practiquen el EMBARGO de los bienes muebles y enseres de propiedad de la Entidad ejecutada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL que se encuentran ubicados en la Avenida el dorado CAN CRA 54 No. 26-25 de la ciudad de Bogotá, limitando la medida a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS (344.616.121), por lo que por Secretaría se ordenará librar el Despacho comisorio con los insertos del caso.”

-. Ahora bien, el artículo 171 del CGP establece, sobre la comisión para la práctica de pruebas lo siguiente:

“ARTÍCULO 171. JUEZ QUE DEBE PRACTICAR LAS PRUEBAS. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón del territorio o por otras causas podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción.

Excepcionalmente, podrá comisionar para la **práctica de pruebas** que deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos indicados en este artículo.

Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo estime conveniente.

Las pruebas practicadas en el exterior deberán ceñirse a los principios generales contemplados en el presente código, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes.”

III. CONSIDERACIONES

A juicio del Despacho, la decisión proferida a través del auto de fecha 12 de febrero de 2021 se debe mantener por las siguientes razones:

-. El Tribunal Administrativo del Meta al proferir la decisión sobre las medidas cautelares a través del auto de fecha 20 de noviembre de 2019, basó su decisión en la norma contenida en el artículo 171 del Código General del Proceso, el cual, como ya se señaló y se puede deducir claramente de su lectura, resulta aplicable de **manera excepcional** para la comisión para la **práctica de pruebas**, mas no, para el embargo y secuestro de bienes muebles y enseres.

-. Es incuestionable que, en el ejercicio de su actividad, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el mandato superior del artículo 230 de la Carta. De este modo, si el superior estableció como marco jurídico para la comisión conferida el mencionado artículo 171 del Código General del Proceso; esta sede judicial, tal como se indicó en el auto atacado, al evidenciar que dicha norma no se refiere a la comisión para la práctica de diligencias como la de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres, no tenía otro camino que devolver el despacho comisorio por cuanto carece de la competencia para ejecutar el contenido de la comisión, que, se reitera, no fue conferida para la práctica de pruebas.

-. De otro lado, este Despacho judicial no está llamado a subsanar esta situación vía interpretación o integración normativa, por cuanto considera que debe ser el mismo órgano judicial superior que tomó la decisión, el que debe aclarar, de acuerdo con la naturaleza de la comisión conferida, la norma que sustenta tal decisión; más aún, al tratarse de una medida cautelar de embargo y secuestro de bienes y enseres.

Cabe precisar que auxiliar una comisión conferida de la forma en que se hizo, podría dar lugar a eventuales nulidades por cuanto la norma en la que se basó su emisión, difiere en cuanto a su regulación, de la naturaleza real de lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Meta; dicho de otra forma, una cosa es comisionar para la práctica de pruebas y otra muy diferente, es conferir una comisión para efectuar el embargo y secuestro de bienes muebles y enseres, en este caso de propiedad de la entidad ejecutada.

Respecto de lo anterior, es menester señalar que el artículo 40 del Código General del Proceso establece que “El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue (...) **Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula.**”. (Se resalta)

Así las cosas, si la comisión conferida era para la práctica de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres, no ha debido basarse en el precitado artículo 171 del estatuto procesal, que, como ya se indicó, alude a la comisión para la práctica de pruebas, es decir, otorga facultad para practicarlas, pero no para embargar y secuestrar bienes.

A juicio del Despacho, con la comisión conferida por el Tribunal Administrativo del Meta con base en el artículo 171 del Código General del Proceso, se transmitió la facultad de practicar pruebas, no de adelantar la diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres. De esta forma, actuar por fuera del marco de esa facultad, acarrearía una nulidad.

-. Ahora, la discusión que trae a colación el recurrente en cuanto a que los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso establecen en primer lugar una competencia general en cabeza de las autoridades judiciales de menor jerarquía para atender las comisiones y un papel subsidiario a otras autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas, es un asunto que, debe definir el órgano judicial que confirió la comisión, no esta sede judicial, que, se reitera, no está llamada a subsanar este tipo de circunstancias porque carece de competencia para ello.

El órgano judicial superior, es decir, el Tribunal Administrativo del Meta al transmitir una serie de competencias a través de la comisión conferida, debe ser el que defina con claridad, a partir de la naturaleza de la comisión, el fundamento legal de ésta y además, la autoridad a la cual se transfiere la competencia específica: a una autoridad judicial o a una autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales o administrativas.

-. Respecto al argumento de la jerarquización de las autoridades que deben conocer de las comisiones, es preciso traer a colación el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil ya citado en la decisión recurrida, el cual alude a las características de la comisión judicial y del cual, no se deduce que exista tal división entre una competencia general y subsidiaria entre autoridades judiciales y administrativas:

“A través de la comisión, no sólo se materializa el principio de colaboración armónica que guía la actividad de las autoridades, sino que además contribuye a que el ejercicio de la función judicial se adelante de forma eficaz y eficiente. (...) Frente a la comisión es posible señalar las siguientes características: (i) Puede conferirse para la práctica de pruebas y de diligencias que deban adelantarse por fuera de la sede del juez de conocimiento. De igual forma, para el secuestro y embargo de bienes. (...) Es viable también acudir a la figura de la comisión para realizar diligencias en el exterior. (ii) Es posible comisionar: a) a otras autoridades judiciales, b) a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas, y c) a los alcaldes y demás funcionarios de policía, salvo los inspectores de policía, como se explicará más adelante. En este último caso siempre y cuando la comisión no tenga como objeto la recepción o práctica de pruebas. (iii) La autoridad que haya sido comisionada debe tener competencia en el lugar en donde se va a desarrollar la actividad delegada.”³

Por las anteriores razones no se repondrá la decisión y ésta se mantendrá.

En consecuencia, el **JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

1. **NO REPONER** el auto de fecha 12 de febrero de 2021, por medio del cual este Despacho resolvió devolver el despacho comisorio conferido por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del expediente No. 500012326000-2019-00060-01, de conformidad con las consideraciones que preceden.

³ Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación No. 2332 de 6 de septiembre de 2017. Consejero Ponente Oscar Darío Amaya Navas.

2. En consecuencia, **NEGAR** la solicitud de fijar nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de embargo y secuestro de los bienes muebles en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, conforme al despacho comisorio proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. Por Secretaría, comunicar de manera inmediata la presente decisión al Tribunal Administrativo del Meta, y dese cumplimiento a la orden impartida en el auto de fecha 12 de febrero de 2021.
4. **NOTIFICAR** la presente decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ

CASZ